

Asociación ilícita fiscal. Acuerdo de voluntades de carácter permanente. Pluralidad de planes delictivos indeterminados. Distinción con el pacto o convergencia criminal de carácter transitorio, propio de la participación criminal

PARTE/S:	XIULONG, YAN y otros s/Legajo de Apelación
TRIBUNAL:	Cám. Fed. San Martín
SALA:	I
FECHA:	19/12/2023
JURISDICCIÓN	Buenos Aires

San Martín, 19 de diciembre de 2023.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. La defensa técnica de Yan Xiulong y Chen Guoling interpuso recurso de apelación contra el auto que ordenó sus procesamientos por considerar, al primero, coautor del delito de asociación ilícita tributaria (artículos 45 del CP y 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario previsto en la Ley 27.430) y, a la segunda, coautora del delito de asociación ilícita tributaria, en concurso ideal con evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2017 -2 hechos- a los que se hizo concurrir realmente entre sí (artículos 45, 54 y 55 del CP y 1 y 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario previsto en la Ley 27.430).

A su vez, la parte recurrió la decisión de mantener las medidas de coerción personal dispuestas sobre los nombrados en los incidentes de exención de prisión (artículo 210, incisos a, c, d y e del CPPF) y la traba de embargo sobre sus bienes por las sumas de \$5.000.000 y \$7.000.000, respectivamente.

Al momento de expresar agravios con relación al procesamiento, el recurrente limitó sus protestas a la decisión de considerarlos coautores del delito de asociación ilícita fiscal, pero no puntualizó quejas en torno al reproche que se formuló por el delito de evasión tributaria reiterada a Guoling. Por ende, la situación de la nombrada respecto a este último delito no será abordada por el Tribunal.

En efecto, en su presentación expuso que “pertenecer a una misma cartera de clientes de una misma contadora que trabaja con muchos comercios del rubro supermercados chinos, no implica en lo más mínimo la existencia de una aceptación o voluntad de integrar asociación ilícita tributaria alguna”.

A su vez, indicó que “el componente de la habitualidad no es una cuestión meramente enunciativa, sino que el mismo forma parte de uno de los requisitos fundamentales para dar con el tipo penal endilgado y es por ello que el hecho de que Yan Xiulong (inconsistencias en sus declaraciones en (un) solo periodo, un hecho) y Chen Guoling (con solamente dos inconsistencias en sus declaraciones (...), dos hechos) (...) nos aleja inexorablemente de este elemento de la habitualidad”.

Expresó que “se arribó a un temperamento inculpativo sobrepasando los límites que imponen los principios de inocencia, de la ultima ratio de la ley penal o, si se quiere la aplicación del principio de la ley penal más benigna, dado que respecto a (sus) defendidos (...) podrían haber sido imputados por una evasión fiscal simple, no

comprometiendo de esta manera su libertad personal y que a la postre podría subsanarse con la integración de los créditos en favor de las denunciantes”.

Indicó que el auto es arbitrario porque “efectúa un escueto y confuso análisis respecto a la supuesta participación de (sus) dos defendidos en la asociación criminal, la cual les endilga la comisión del delito de evasión fiscal simple -haber aportado elementos para confeccionar las declaraciones juradas y de esta manera incumplir deliberadamente mediante el engaño y ardid la evasión al fisco-, para que después arbitrariamente determinar que (sus) dos defendidos (los cuales no se conocen entre ellos), por el solo hecho de pertenecer a una misma cartera de clientes de un estudio contable son partícipes de una asociación ilícita de carácter tributario, conclusión a la que ha llegado sin ningún elemento de cargo y es justamente allí en donde el procesamiento no se basta a sí mismo”.

Además, expuso que “no escapa a esta defensa de que (sus) pupilos procesales no poseen ni los conocimientos técnicos, ni idiomáticos para manejar cuestiones de índole contable en donde a más abundamiento ellos delegan el cien por ciento del manejo de sus cuentas tributarias a los profesionales que contratan para ello”.

Agregó, con cita de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, que los destinatarios de la figura de la asociación ilícita tributaria son los miembros de las organizaciones que se dedican a falsificar y comercializar facturas o adulterar los sistemas informáticos de los controladores fiscales y que el caso no se adecúa a esos parámetros.

En orden a las medidas de coerción personal impuestas, afirmó que son desproporcionadas y que es peligroso restringir la libertad de las personas sobre la base de la configuración del delito de asociación ilícita tributaria, en condiciones que la investigación no tiene elementos sólidos y el caso no se ajusta a una “asociación mafiosa dedicada a cometer delitos fiscales”.

En consecuencia, también, entendió que debía dejarse sin efecto el embargo impuesto.

II. En esta instancia, el apelante presentó memorial, en el que agregó que el tipo penal cuestionado “está (dirigido) a perseguir al ‘crimen fiscal organizado’, la ideación de la norma apunta a perseguir a las organizaciones vernáculas conocidas como ‘usinas de facturas apócrifas’, para combatir el crimen fiscal organizado, ejercido mediante fraudes fiscales complejos, basados en la intervención de organizaciones distintas de los contribuyentes, montadas con el propósito de colaborar con ellos mediante aportes o servicios útiles para evadir dolosamente impuestos a enormes escalas” y aseguró que la situación procesal de sus asistidos no se ajustan a tales preceptos.

Insistió, con la ausencia del elemento de habitualidad y de dolo y agregó otra queja que no fue planteada inicialmente en su recurso de apelación originario, tal como la “actualización del umbral de punibilidad”, punto este último que no debe ser abordado (artículo 454, tercer párrafo, del CPPN).

Por su parte, el Fiscal General sostuvo que “más allá de la calificación legal que en definitiva corresponda asignarle al suceso investigado”, no adhería al recurso de apelación.

En punto a la posición de la querella, en torno al decisorio que corresponde aquí tratar, entendió que se encontraba acreditado la existencia del acuerdo de voluntades para conformar la asociación ilícita tributaria, la existencia de una ingeniería destinada a evadir los fondos que debían ingresar a las arcas del fisco, la identidad entre las inconsistencias, irregularidades y patrón malicioso en los contribuyentes investigados y sus situaciones fiscales, la habitualidad y permanencia en el tiempo, los roles ejercidos por cada uno de los consortes y los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en trato.

Finalmente, la defensa de Estela Nanci Arce, Leticia Susana Folz y Elisa Alomo presentó dos escritos en los que manifestó que adhería al recurso de apelación de Xiulong y Gouling, sin exponer los motivos en que se fundaban y solicitó se practique la audiencia prevista en el artículo 454 del CPPN.

Al mismo tiempo, presentó otros tres escritos en los que manifestó que sus defendidas expresaron que no habían sido notificadas de la resolución de autos y que solicitaba se les conceda la apelación, en virtud de que "no les cause un gravamen irreparable y poder hacer uso de la defensa en juicio".

Estos tres últimos escritos, fueron enviados por el Tribunal al juzgado, por estar dirigidos a éste último, oportunidad que declaró que los recursos de apelación eran inadmisibles por extemporáneos (ver decreto del 27/9/2023 de los autos principales FSM 97596/2018).

La defensa de Estela Nanci Arce y Susana Leticia Folz interpuso recurso de queja contra la decisión del juzgado de no conceder el recurso de apelación contra el auto de procesamiento, el dictado de medidas de coerción personal y el embargo.

En consecuencia, se formó el legajo FSM 97596/2018/14 /RH1, en el que, en el día de la fecha, el Tribunal resolvió no hacer lugar parcialmente a la queja deducida y estar a la inadmisibilidad decretada por el juzgado, respecto a los recursos de apelación presentados por la defensa de Folz y Arce contra el auto de procesamiento y las medidas de coerción personal dictadas contra ellas.

A su vez, se dispuso declarar parcialmente la nulidad del decreto del juzgado del 27/9/2023 de los autos principales, en cuanto declaró inadmisibles los recursos de apelación de Folz, Arce y Alomo contra el auto que dispuso sus embargos. Con relación a esta última, la extensión de la medida se debió a las disposiciones del artículo 168, segundo párrafo, del CPPN.

Finalmente, encomendamos al juzgado que efectúe las notificaciones personales pertinentes (artículo 146, in fine, del CPPN).

III. En primer lugar, corresponde tratar la adhesión intentada por las defensas técnicas de Elisa Alomo, Leticia Susana Folz y Estela Nanci Arce.

Teniendo en cuenta la nulidad parcial declarada por el Tribunal en la fecha, en el legajo FSM 97596/2018/14/RH1, en torno al decreto que dispuso la inadmisibilidad del recurso de apelación de las defensas de las nombradas, contra el auto que dispuso sus embargos, lo que se dirá a continuación se limitará a la pretensa adhesión de las impugnaciones contra el procesamiento y las medidas de coerción personales dictadas en sus contras.

Respecto a las medidas de cautela real, las imputadas y sus defensas, podrán ejercer los derechos que estimen corresponder, a partir de las notificaciones personales que el juzgado debe realizar, según lo encomendado por el Tribunal en el legajo FSM 97596/2018/14/RH1.

Aclarado ello, consideramos inadmisibile el planteo intentado por Alomo, Folz y Arce.

En efecto, no corresponde la adhesión por parte de quien dedujo un recurso que fue rechazado, toda vez que esa facultad se acuerda a quien, teniendo el derecho a recurrir y no lo hizo, pueda practicarla tardíamente, en el tiempo de otro.

Si se ejerció tal derecho, pero fuera de los términos legalmente establecidos, es imputable a su conducta discrecional la pérdida de una vía considerada idónea para reparar su gravamen, por lo que la adhesión pretendida resulta inadmisibile en una etapa ya precluída (esta Sala, Secretaría Penal Nº 1, FSM 50689/2016, "Herrera, Guillermo Alejandro y otros s/legajo de apelación", registro de Cámara Nº 11.161, resuelta el 3/10/2017, con cita del Fallo: 302:1337, entre otros).

Así, la adhesión formulada no resulta ser la vía idónea, cuando simultáneamente se intenta apelar extemporáneamente la decisión jurisdiccional.

Si bien los argumentos expuestos hasta aquí son suficientes para rechazar la pretensión, debemos destacar que el ordenamiento procesal exige para su admisibilidad que la adhesión sea presentada con específica indicación de los motivos en que se funda (artículo 439 del CPPN) y en el término de 3 días a partir de la notificación que se formula a la parte (artículo 453 del CPPN).

Solo se pretende que el impugnante haga la indicación de una o más censuras contra la resolución atacada, a los fines de determinar el ámbito del agravio y el límite del recurso al que se adhiere (esta Sala, Secretaría Penal Nº 1, FSM 151830/2018/1/CA1, "Trunkhardt, Federico s/incidente de nulidad", registro de Cámara Nº 13.391, resuelta el 4/10/2022, entre muchas otras).

En el caso concreto, el 13/9/2023 se notificó a la partes interesadas sobre el inicio del trámite procesal del recurso de apelación y, el 19/9/2023, vencidas las dos primeras horas, es decir extemporáneamente, la defensa técnica de las nombradas presentó el escrito de adhesión, sin expresar los motivos en que se fundaban y pidió la concreción de la audiencia prevista en el artículo 454 del CPPN, cuando el apelante que motivó el inicio de esta incidencia había optado por presentar memorial sustitutivo de ella (conforme Acordada 189/2008 de la CFSM).

Entonces, debe agregarse a lo ya expuesto, la inobservancia de las normas de forma para la interposición de la adhesión a un recurso de apelación.

Por último, en torno a la voluntad recursiva contra la decisión jurisdiccional sobre las medidas de coerción personal dictadas, como se dirá oportunamente al momento de tratar la cuestión respecto de Xiulong y Guoling, deviene inadmisibile su tratamiento en esta oportunidad, en orden a los fundamentos que más adelante desarrollaremos.

En consecuencia, sus pretensiones son improcedentes.

IV. Introduciéndonos al recurso de apelación de la defensa técnica de Xiulong y Guoling, entendemos que, en punto a la carencia de fundamentación alegada, la posición de este Tribunal sobre cuándo una resolución se encuentra motivada y, por ende, no es arbitraria, ha sido desarrollada en numerosos precedentes.

Entre ellos, nos podemos remitir al punto II del auto dictado en la causa FSM 4974/2023/2/CA1, "Duarte, Walter Ezequiel s/legajo de apelación", Secretaría Penal Nº 1, registro de Cámara Nº 13.674, resuelta el 29/6/2023 –entre muchas otras–, que las partes pueden consultar en el Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar).

Aquí, nos limitaremos a afirmar que, en el caso concreto, el Tribunal advierte que la resolución reúne las exigencias del artículo 123 del CPPN, en tanto la decisión jurisdiccional estuvo motivada en base a los elementos agregados al expediente y exhibe las razones que tuvo en miras la juez para dictar el pronunciamiento en los términos del artículo 306 del CPPN.

Ello, pese a que discrepemos con el criterio adoptado, conforme se podrá apreciar a continuación.

V. En efecto, no compartimos la adecuación típica que se formuló respecto de las conductas atribuidas a Xiulong y Guoling, en la figura prevista en el artículo 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario previsto en la Ley 27.430.

El tipo penal demanda tener por acreditado que se tome parte de la asociación conformada para delinquir, en forma indeterminada y habitual, con relación a delitos tributarios (Borinsky Mariano Hernán, Galván Greenway, Juan Pedro, López Biscayart, Javier y Turano, Pablo Nicolás, Régimen Penal Tributario y Previsional, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 196).

A partir de esa definición, evidenciamos que corresponde diferenciar la presunta participación criminal en los delitos de evasión tributaria por el cual fueron indagados los nombrados, de la figura de la asociación ilícita tributaria.

Quien es miembro de la asociación ilícita fiscal, no necesariamente debe ser autor o partícipe de la evasión tributaria que después se ejecuta y quien es autor o partícipe de la evasión tributaria que se ejecuta con posterioridad a su creación, no necesariamente debe ser miembro de la asociación ilícita fiscal.

En esa línea, corresponde distinguir la asociación ilícita fiscal que demanda el acuerdo estable de voluntades entre tres o más personas, con caracteres de organización y habitualidad, para cometer delitos previstos en el régimen penal tributario - determinados en su adecuación típica, pero indeterminados en la pluralidad de planes delictivos-, de la efectiva comisión de los delitos previstos en la ley penal tributaria que constituyen sus fines.

La indeterminación de los planes delictivos por los cuales se conforma la asociación ilícita se vincula con su carácter permanente y se diferencia del pacto transitorio que puede existir entre dos o más personas para cometer un hecho delictivo determinado, como podría ser el de evasión tributaria, supuesto éste último que se ajusta a las reglas de autoría y participación criminal (artículo 45 y siguientes del CP).

A partir de las consideraciones del auto recurrido, surge que se les imputó a los nombrados el ilícito previsto en el artículo 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario, en virtud de haberse valido de la "ingeniería de la especialidad destinada a evadir los fondos que debían ingresar a las arcas del fisco los contribuyentes" o el "mismo patrón malicioso", que se les atribuye haber ideado o creado a los miembros del estudio contable investigado en la causa, integrado por personas distintas a Guoling y Xiulong.

En concreto, el juzgado sostuvo que sus intervenciones en la asociación ilícita tributaria, "quedó establecida a partir de haber aportado los elementos necesarios para confeccionar las declaraciones juradas y de esta manera incumplir deliberadamente mediante el engaño y ardid la evasión al fisco respecto de los impuestos IVA y Ganancias".

A criterio del Tribunal, la imputación dista de adecuarse a los preceptos típicos de la figura asociativa criminal y se vincula con el reproche que el juzgado les formuló en orden al delito de evasión tributaria, cuando fueron indagados ambos y cuando fue procesada Guoling.

En efecto, si la imputación que formuló el juzgado respecto a las conductas de Guoling y Xiulong se circunscribe a haber utilizado el supuesto mecanismo de la asociación criminal fiscal para evadir tributos específicos y en periodos fiscales determinados, conforme los hechos por los cuales fueron indagados, los acuerdos ilícitos que se le reprochan a los nombrados no son permanentes, ni se destinan a planes delictivos indeterminados.

Más aún, la doctrina y la jurisprudencia señalan que la incorporación de la asociación ilícita fiscal obedeció, según el mensaje que acompañó el proyecto de ley originario, a la experiencia recogida por la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre "la proliferación de un alto grado de especialización en la ejecución de conductas delictivas, habiéndose detectado la actuación de verdaderas organizaciones ilícitas dedicadas a 'vender' -como si se tratara de un producto- el soporte técnico, logístico o intelectual para la comisión de delitos de evasión" (López Biscayart, Javier, "El agravamiento de los delitos tributarios y la asociación ilícita fiscal", en Folco, Carlos María, Abraldes, Sandro F. y López Biscayart, Javier, *Ilícitos Fiscales. Asociación ilícita en materia tributaria*. Ley 25.874, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, págs. 138-139; y, en idéntico sentido, Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit., p. 196; Riquert, Marcelo A., "Ley 24.769. Régimen Penal Tributario y Previsional", en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial*, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, t. 13, págs. 496-497; CFCP, S. IV, FRO 42000475/2011/TO1/33/CFC3, "Berdichevsky, Claudia; Báez, Raúl; Prestreza, José Luis s /recurso de casación", registro N° 1194/22.4,

resuelta el 5/9 /2022; CFCP, S. III, FCB 32021667/2011/TO1/CFC1, "Wolfel, Jorge Edgardo y otros s/recurso de casación", del voto del juez Eduardo Rafael Riggi, registro N° 1005/22, resuelta el 13 /7/2022; CFCP, S. IV, FMZ 29171/2017/TO1/CFC4, "Santander, Rubén Daniel y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad, del voto de la juez Ángela Ester Ledesma, al que adhirió el juez Mariano Hernán Borinsky, registro N° 388/22, resuelta el 6/4/2022; CFCP, S. I, FMZ 54017330/2009/37/CFC4, "Roses, Fernando Omar y otros s/recurso de casación", del voto del juez Diego Gustavo Barroetaveña, registro N° 1906/21, resuelta el 18/10/2021; y CFCP, S. III, FGR N° 17562/2013/CFC2, "Petracca, Mariela Eva y otros s /recurso de casación", del voto del juez Juan Carlos Gemignani registro N° 1185/2021, resuelta el 14/7/2021).

Así, delimitan que la finalidad de estas organizaciones no es perpetrar una determinada evasión fiscal o previsional, sino brindar sustento a cualquier contribuyente que demande tal mecanismo y logística para evadir y, de allí, su peligrosidad (Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit., p. 196; y, en similar sentido, Losada, Luis, "Reflexiones sobre la asociación ilícita tributaria (Art. 15, inc. C, Ley 27.430)", en Haddad, Jorge E., Derecho penal tributario, Hammurabi, Buenos Aires, 2021, p. 125; García Dematteis, Matías H., "La asociación ilícita en materia tributaria", en Altamirano, Alejandro C. y Rubinska, Ramiro M., Derecho penal tributario, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 754; y CFCP, S. IV, FMZ 29171/2017/TO1/CFC4, "Santander, Rubén Daniel y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad", del voto de la juez Ángela Ester Ledesma, registro N° 388/22, resuelta el 6/4/2022).

Para mayor precisión, "lo que nuestros legisladores quisieron tipificar fue la conducta disvaliosa de quienes facilitan la evasión fiscal de otro (contribuyente), proporcionándole a ese otro los medios necesarios para la consecución del fin propuesto" (CFCP, S. III, FGR N° 17562/2013 /CFC2, "Petracca, Mariela Eva y otros s/recurso de casación", del voto del juez Juan Carlos Gemignani, registro N° 1185 /2021, resuelta el 14/7/2021; y, en similar sentido, CFCP, S. II, FMZ 1361/2018/TO1/26/CFC5, "Gulino, Silvia Gladys y otros s /recurso de casación e inconstitucionalidad", de los votos de los jueces Alejandro Walter Slokar y Guillermo Jorge Jacobucci, registro N° 1398/23, resuelta el 22/11/2023; CFCP, S. III, FCB 32021667/2011/TO1/CFC1, "Wolfel, Jorge Edgardo y otros s/recurso de casación", del voto del juez Eduardo Rafael Riggi, registro N° 1005/22, resuelta el 13/7/2022; y CFCP, S. IV, FMZ 29171/2017/TO1/CFC4, "Santander, Rubén Daniel y otros s /recurso de casación e inconstitucionalidad, del voto del juez Carlos Javier Carbajo, registro N° 388/22, resuelta el 6/4/2022).

En el particular, la imputación que formuló el juzgado a Xiulong y Guoling no se ajusta ni a los requerimientos típicos, ni a la ratio de antijuricidad de la figura de la asociación ilícita fiscal.

Del auto de procesamiento, no surge apreciación alguna que nos indique que Xiulong y Guoling, en concreto, hayan acordado, de un modo estable y organizado, con los restantes investigados en la causa para idear y luego ofrecer a contribuyentes indeterminados una mecánica ardidosa o engañosa que sirva para evadir tributos indeterminados.

Sin entrar al fondo del análisis, porque no fuimos convocados por el apelante para ello, nos limitaremos a decir que el eje del reproche que formuló el juzgado contra ellos es el aporte de sus datos contables a otros, para el llenado de sus declaraciones juradas engañosas y el estudio que se haga sobre esa conducta, en sus respectivos casos, no debería sobrepasar, en principio, la figura de la evasión tributaria.

En consecuencia, con los elementos reunidos hasta el momento, corresponde revocar sus procesamientos en orden al delito de asociación ilícita fiscal, sin perjuicio de los

resultados que pueda obtener el juzgado de aquí en más, en orden a la profundización de la investigación.

Lo así decidido, determina la ausencia de necesidad de abordar otros agravios introducidos.

VI. En función de lo así determinado, debemos formular una aclaración, teniendo en cuenta la descripción de los presuntos hechos ilícitos por los cuales fueron indagados Yan Xiulong y Chen Guoling, a lo que debe sumarse respecto a esta última, que el juzgado cuando la procesó por la asociación ilícita fiscal y la evasión tributaria, aplicó las reglas del artículo 54 del CP en el concurso de ambos delitos.

Al respecto, consideramos que entre el delito de asociación ilícita tributaria y de evasión tributaria media un concurso real, por ser autónomos uno respecto al otro, conforme la posición mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia (Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769, 2º edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, p. 240; Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano, ob. cit., p. 199; García Dematteis, ob. cit., págs. 768-769; Riquert, ob. cit., p. 520; CFCP, S. II, FMZ 1361/2018/TO1/26/CFC5, "Gulino, Silvia Gladys y otros s /recurso de casación e inconstitucionalidad", de los votos de los jueces Alejandro Walter Slokar y Guillermo Jorge Yacobucci, registro N° 1398/23, resuelta el 22/11/2023; CFCP, S. IV, FMZ 29171/2017/TO1/CFC4, "Santander, Rubén Daniel y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad", del voto del juez Carlos Javier Carbajo, registro N° 388/22, resuelta el 6/4/2022; CFCP, S. III, FGR 17562/2013/CFC2, "Petracca, Mariela Eva y otros s/recurso de casación", del voto del juez Eduardo Rafael Riggi, registro N° 1185/2021, resuelta el 14/7 /2021; y CFCP, S. IV, FCB 12000035/2012/5/CFC2, "Santiago, Oscar Lucas y otros s/recurso de casación", del voto del juez Gustavo M. Hornos, al que adhirieron los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, registro N° 641/17.4, resuelta el 5/6/2017).

En efecto, la asociación ilícita fiscal no demanda la ejecución de los planes delictivos indeterminados que constituyen la finalidad del acuerdo de voluntades criminales.

Si uno de ellos se lleva a cabo, es un hecho distinto a ella, que debe ser abordado bajo el concurso del artículo 55 del CP.

Por ello, en orden a los argumentos desarrollados en el punto V, corresponde revocar el procesamiento dictado contra Xiulong y hacerlo, de modo parcial, respecto a Guoling.

VII. En lo que respecta a los agravios vinculados a las medidas de coerción personal impuestas a Xiulong y Guoling, debemos destacar que el juzgado, para ambos casos, dispuso el mantenimiento de las restricciones de libertad, previstas en el artículo 210, incisos a, c, d y e del CPPF, que fueron ordenadas en los respectivos incidentes de exención de prisión.

Con relación a Xiulong, si bien este Tribunal revocará su procesamiento, consideramos que la decisión, en este caso en particular, no lleva necesariamente a que se dejen sin efecto esas medidas de restricción de libertad, cuyo mantenimiento se dispuso al momento de procesarlo.

En efecto, el imputado se encuentra indagado, por otros hechos ilícitos, distintos y autónomos a la asociación ilícita fiscal (artículo 55 del CP) -las presuntas evasiones tributarias- y el juzgado aún no resolvió su situación procesal en torno a ellos.

En consecuencia, respecto a Xiulong no corresponde revocar esas medidas, como consecuencia de la falta de mérito que aquí se resuelve.

Empero, el juzgado debe revisar la oportuna decisión que se adoptó en el incidente de exención de prisión, porque la medida de restricción de libertad debe ser proporcional al hecho ilícito atribuido. Entonces, si respecto al delito más gravoso se dictará la falta de mérito, importa que el juzgado analice nuevamente la cuestión, teniendo en miras

al principio de mención y, consecuentemente, si procede morigerar su situación cautelar.

Tales argumentos, aplican también al caso de Guoling.

Aclarado ello, entendemos que el recurso de apelación interpuesto sobre el punto fue erróneamente concedido.

En efecto, es criterio arraigado del Tribunal que, en estos supuestos, solo es apelable el auto de procesamiento (artículo 311 del CPPN), porque el dictado de la prisión preventiva o de cualquier otra medida de coerción personal de menor intensidad a ella, es su consecuencia, a partir de la valoración que efectúa el juez de conformidad a lo dispuesto en los artículos 310, 312 y 319 del CPPN.

Los eventuales planteos que podrían formularse a partir de las medidas de restricción de la libertad de las personas, decididas al momento de dictar el auto previsto en el artículo 306 del CPPN, sea su prisión preventiva o cualquier otra morigerada dentro de la totalidad de las posibilidades establecidas en el artículo 210 del CPPF, no pueden convertirse en argumentos comunes para cuestionar por cualquier medio sus legitimidades, cuando el propio ordenamiento procesal y la naturaleza de ese tipo de disposiciones establece la vía incidental, como régimen que ampara el derecho constitucional de referencia (artículos 316 y siguientes del CPPN).

Entonces, a través de la vía incidental es que deben formular sus pretensiones.

En el caso, el análisis de las restricciones impuestas fue tratado en su incidente de exención de prisión y, eventualmente, podrían ser evaluadas en otros de distinta naturaleza (como por ejemplo, la autorización de salida del país).

VIII. En punto a los agravios del embargo, en el caso de Yan Xiulong, a consecuencia de la revocatoria del auto de procesamiento, será dejado sin efecto.

En el supuesto de Chen Guoling, a partir del modo en que se resuelve el recurso, entendemos que corresponde reducir la cautela real a la suma de \$4.000.000, monto ajustado a los parámetros establecidos en el artículo 518 del CPPN, para garantizar la indemnización civil y las costas del proceso.

IX. Por último, advirtiendo que aún restan resolver situaciones procesales de algunas personas sometidas a proceso, en orden a ciertos hechos ilícitos por los cuales fueron indagados y que no fueron incluidos en el auto elevado en grado de apelación, se recomienda al juzgado que adopte sobre ellos la decisión jurisdiccional que por derecho corresponda.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR IMPROCEDENTE la adhesión formulada por la defensa técnica de Estela Nanci Arce, Leticia Susana Folz y Elisa Alomo, con los alcances establecidos en el punto III de esta resolución.

II. ESTAR al concurso real dispuesto en el punto VI de esta resolución y, consecuentemente, REVOCAR los puntos 1 y 3 de la parte resolutive del auto elevado en grado de apelación, en cuanto dispusieron el procesamiento de YAN XIULONG en orden al delito de asociación ilícita fiscal y mandar a trabar embargo sobre sus bienes.

DISPONER SU FALTA DE MÉRITO con vinculación al delito mencionado (artículos 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario, 55 del CP y 309 del CPPN).

Por tanto, ENCOMENDAR al a quo REVISE las medidas de coerción personal oportunamente impuestas al nombrado en el incidente de exención de prisión, con relación a los restantes hechos presuntamente delictivos por los cuales fue indagado.

III. MODIFICAR el modo en que concurren los delitos por los cuales fue procesado CHEN GUOLING, por el previsto en el artículo 55 del Código Penal y, consecuentemente, REVOCAR PACIALMENTE el punto 4 de la parte resolutive del auto

elevado en grado de apelación, en cuanto dispuso su procesamiento en orden al delito de asociación ilícita fiscal.

DISPONER SU FALTA DE MÉRITO con vinculación al delito mencionado (artículos 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario, 55 del CP y 309 del CPPN).

Por tanto, ENCOMENDAR al a quo REVISE las medidas de coerción personal oportunamente impuestas a la nombrada en el incidente de exención de prisión, con relación a los restantes hechos presuntamente delictivos por los cuales fue indagada y procesada.

IV. REDUCIR el embargo impuesto sobre los bienes de CHEN GUOLING en el punto 6 de la parte resolutive del auto elevado en grado de apelación, a la suma de \$4.000.000.

V. DECLARAR ERRÓNEAMENTE CONCEDIDOS los recursos de apelación contra las decisiones sobre las medidas de coerción personal, dispuestas en los puntos 2 y 5 de la parte resolutive del auto cuestionado.

VI. RECOMENDAR al juzgado lo indicado en el punto IX.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 26.856) y devuélvase.

MARCOS MORAN

JUEZ DE CAMARA

MARCELO DARIO

FERNANDEZ

JUEZ DE CAMARA

ALFONSINA BAVA

SECRETARIA DE CAMARA